



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil

AC108-2022

Radicación n.º 11001-02-03-000-2022-00057-00

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022).

Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá y su homólogo Segundo de Zipaquirá, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por Constructora Vivir Bien S.A.S. y A.E. Constructora S.A.S. contra Organización Empresarial y Comercial Montecarlo J&O S.A.S.

ANTECEDENTES

1. La parte actora presentó su escrito introductor ante los jueces civiles del circuito de Bogotá, pretendiendo que se librara mandamiento de pago por las obligaciones derivadas de un contrato de transacción. En el acápite de competencia, indicó que la misma venía dada por el lugar de cumplimiento de las prestaciones y el domicilio de la parte demandada.

2. El Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, al cual correspondió la causa por reparto, rechazó la

demanda, pretextando que *«como en el presente caso (...) pretenden el cobro coercitivo de una obligación dineraria por incumplimiento al contrato de transacción que suscribió (...) para dar por terminado el proceso 2019-00471 que se adelantaba ante el juzgado Segundo civil del circuito de Zipaquirá (...), es claro que la ejecución de dicha obligación debe adelantarse ante el juez que conoció de ese asunto, lo que le resta competencia funcional a este estrado judicial para tal propósito»*.

3. El estrado receptor, Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, también rehusó el conocimiento del caso, arguyendo que *«[e]n el caso que nos compete se pretende el cobro de la cláusula penal pactada en el contrato de transacción referido, y si bien con dicho convenio se buscó terminar el presente proceso, lo cierto es que dicha transacción no fue aprobada por el juzgado, al punto que se negó la solicitud de terminación elevada con base en dicho documento, siendo claro que no cumplen las condiciones del inciso cuarto del artículo 306 ibídem. Tampoco se advierte que se reúnan las exigencias establecidas para la acumulación de demanda o procesos, conforme lo disponen los artículos 463 y 464 del estatuto procesal civil, puesto que la ejecución no se adelanta contra ninguno de los demandados en este proceso y, por tanto, no se persiguen total o parcialmente sus bienes»*.

Con ese fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo.

CONSIDERACIONES

1. Aptitud legal para la resolución.

Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Anotaciones sobre la competencia.

Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia.

En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:

(i) El **Factor Subjetivo**, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso.

Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 *ejusdem*, a cuyo tenor: «*En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad*».

(ii) El **Factor Objetivo**, que a su vez se subdivide en *naturaleza y cuantía*.

La **naturaleza** consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito¹, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia².

Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la **cuantía** de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 15³ y 25⁴ del estatuto procesal civil.

¹ Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso.

² Artículo 21, numeral 3, *ídem*.

³ «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil».

⁴ «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)».

(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (*v. gr.*, un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.

Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (*naturaleza* o *cuantía*) habrá de acompañarse, en todo caso, del **Factor Territorial**, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el **fuero personal**, el **real** y el **contractual**, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.

El **fuero personal**, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «*salvo disposición legal en contrario*»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.

El **fuero real**, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «*se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza,*

restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).

Y el **fuero contractual** atañe, finalmente, a «*los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos*» en los que «*es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones*».

(iv) El **Factor Funcional** consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.

(v) Y el **Factor de Conexidad**, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.

3. Las normas de atribución territorial en el Código General del Proceso.

Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el

numeral 1º del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «*salvo disposición legal en contrario*», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.

Esas exceptivas, a su vez, pueden ser *concurrentes por elección*, *concurrentes sucesivas* o *exclusivas* (privativas), así:

(i) Los ***fueros concurrentes por elección*** operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).

(ii) Los ***fueros concurrentes sucesivos*** presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.

(iii) Y los ***fueros exclusivos*** son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado).

4. La concurrencia de los fueros «domicilio del demandado» y «lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».

Uno de los supuestos que establecen reglas especiales en materia de competencia territorial está establecido en el numeral 3 del citado artículo 28, según el cual «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos **es también competente** el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita».

Este foro, que refiere a la sede donde deben cumplirse las prestaciones que tienen su fuente en un negocio jurídico o en un «título ejecutivo» de cualquier otra naturaleza, opera de forma *concurrente por elección* con la regla general de competencia (domicilio del demandado), tal y como se sigue del adverbio «*también*», usado allí «*para indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada*»⁵.

Por esa vía, en casos de competencia «*a prevención*», el demandante puede optar ante cuál de los jueces señalados (el del domicilio de su contraparte, o el del foro contractual) radica su causa, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales (sin que ello implique tolerar una elección caprichosa).

5. Caso concreto.

⁵ Diccionario de la lengua española; Edición del Tricentenario, accesible en: <http://dle.rae.es/?id=Z2fyAuY>.

Cierto es, como lo destacó el primero de los funcionarios involucrados en esta colisión, que el título ejecutivo materia del recaudo corresponde a un contrato de transacción suscrito con miras a finalizar un juicio ejecutivo que ya está en curso.

Sin embargo, tal propósito no se ha cumplido, como lo precisaron los ejecutantes en el hecho 7º de su demanda y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, quien no accedió a la solicitud de terminación del proceso con base en la referida transacción, circunstancia que impide dar aplicación a las previsiones del artículo 306 del Código General del Proceso, puesto que el fuero de atracción allí previsto solo se abre paso ante «*obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas*» por el respectivo fallador.

Así las cosas, descartada la presencia del aludido criterio especial de asignación, resulta claro que las reglas aplicables a este asunto son las previstas en los numerales 1º y 3º del artículo 28 del estatuto procedimental, es decir, el fuero general de competencia y el lugar de cumplimiento del negocio jurídico sobre el que versan las pretensiones; factores estos que, por igual, conducen a colegir que es el juzgador de la ciudad de Bogotá quien debe asumir el conocimiento de las diligencias, dada la información que sobre el particular se suministró en el libelo incoativo de este trámite (pág. 1, 4 y 9).

6. Conclusión.

La competencia para conocer del presente asunto corresponde al primero de los falladores involucrados en esta causa.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá.

SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda.

Notifíquese y Cúmplase

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado

Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):

Luis Alonso Rico Puerta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 596D70FAD8AD5744711B301D1B2EA86215FBE4D76693E951F855089619AE10F5

Documento generado en 2022-01-25